



---

# EL DESARROLLO Y LA CALIDAD SOCIAL DEL CRECIMIENTO

---

## III. Los “Pilares del Modelo”: ¿maquillaje al neoliberalismo?

### Tabla de contenido

## II. Los “Pilares” del Modelo MESCP

¿El crecimiento empobrecedor como modelo “progresista”?	1
La retención del excedente económico (el “government take”)	3
Inversión pública, distribución y demanda interna	4
Financiarización	7
Si fracasó la diversificación productiva, el Plan no tiene base	9

### III. Los “Pilares del Modelo”: ¿maquillaje al neoliberalismo?

#### ¿El crecimiento empobrecedor como modelo “progresista”?

Los dos primeros Ensayos sobre “El desarrollo y la calidad social del crecimiento”, muestran que el crecimiento de la economía boliviana no responde a las expectativas de una “economía para la gente”. Al analizar los rasgos estructurales, las series del PIB entre 1990 y 2019 (último año disponible en el INE) muestran tendencias que son contrarias a las de una economía “progresista”. Entre 1990-05 y 2006-19, el aporte de la inversión a la demanda global interna aumenta del 15% al 19% mientras que la contribución del consumo de los hogares cae del 71% al 65%. Simultáneamente, la participación de las exportaciones sube del 23% al 37% del PIB, y las importaciones pasan del 28% al 35%.

Respecto al consumo interno (sector público más los hogares), las importaciones equivalían al 31% del consumo entre 1990 y 2005, y se disparan al 44.5% en 2006-16; respecto al consumo de los hogares, las importaciones aumentan del 37% al 55%. Si a estos datos se suma el efecto del contrabando en el consumo de los hogares, la conclusión es que el “crecimiento” está destruyendo la capacidad productiva de la economía para crear valor y empleo.

La evaluación de los rasgos regionales y sectoriales del crecimiento, por su parte, establecen de forma incuestionables que el crecimiento reciente, se caracteriza porque está apuntalado en el crecimiento de los sectores y actividades que menos deberían crecer si buscamos construir una economía diversificada, de pleno empleo, y sostenible, social y ambientalmente.

Desde 2007 alertamos al gobierno sobre estas tendencias. ¿Cómo explicar que un modelo del que se esperaba una transformación estructural de la economía en beneficio de los sectores históricamente menos beneficiados, esté generando los resultados identificados?

El análisis de José Valenzuela Feijóo, economista marxista de la UNAM, coincide con las ideas que expresamos desde hace años (<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=535055493002>), pero muestra que el “modelo” boliviano podría, en realidad, ser parte del modelo más general de los gobiernos “progresistas” de América Latina. Cito libremente algunas de sus ideas que son pertinentes a las conclusiones de Ensayos mencionados.

“El modelo neoliberal genera un impacto en la distribución del ingreso que es brutalmente regresiva: a los pobres los hace más pobres y a los ricos más ricos.” “En América Latina, los movimientos ‘progresistas’ (de Lula, Bachelet, Mujica, Kirchner Chávez, Correa o Morales) y lo que antes pudo ser una izquierda política, como regla criticaron el aspecto distributivo del neoliberalismo, pero, como se olvidaron por completo de la producción, aplican un esquema que legitima el patrón neoliberal con algunas ‘aspirinas’ de redistribución, lo que expresa un

error teórico mayor: pensar que es posible una transformación sustantiva en la distribución sin alterar el espacio de la producción.”

“El gasto social buscaría apoyar a los segmentos más pobres de la población, pero, como regla, no implican crear u ofrecerles empleos productivos. Algunos operan con transferencias directas (bonos) a personas y familias, o se dan semillas, fertilizantes, créditos de costo casi nulo, etc. para favorecer a la llamada ‘micro-empresa’. El impacto que estos apoyos tienen en términos de producción es prácticamente nulo, y lo que consiguen es ayudar a perpetuar la subsistencia de estos grupos.”

“No hay que ser muy avisado para percatarse que esas políticas, a la larga, no se pueden mantener y sólo buscan ocultar los males que va generando una estructura económica que, por lo visto, no se quiere modificar. Al final de cuentas, lo que tenemos es una gran limosna estatal, en la que se gastan enormes fondos sin que nada importante resuelvan.”

“Para mejor dimensionar el problema, no se debe olvidar el telón de fondo que es estructural: el estilo neoliberal no genera empleos productivos; se observa un incesante crecimiento de la población desplazada y marginal: desempleados abiertos, ocupaciones precarias, ambulantes, ilegales, sectas criminales, narcotraficantes, etc. Lo que antes pudo ser una mancha, ahora es un océano gigantesco de informalidad que ya abarca a más de la mitad de la población económicamente activa (PEA).”

“El gasto estatal de marras genera otras consecuencias. Una parte nada despreciable de esos fondos no llega a las familias de destino, sino que va a parar a los bolsillos de los funcionarios que administran la ayuda estatal; y, en los que reciben esos fondos, claramente se genera una mentalidad servil, propia de los que viven de limosnas.”

“Las preguntas obvias son: ¿No sería más racional generar ocupaciones productivas bien remuneradas, y aplicar una política de salarios reales crecientes que le permitan a la población trabajadora pagar los costos reales de los correspondientes servicios? ¿No será mejor, más eficaz y más digno, financiar desarrollos industriales que generen empleos dignos, productivos, calificados, y bien pagados?”

“Pero esa reorientación del desarrollo no es posible sin alterar profundamente los parámetros centrales del estilo neoliberal. El que los ‘progresistas’ no sigan ese camino, es la confesión más prístina de que no se busca sepultar al neoliberalismo sino respetarlo y, dentro de lo poco que se puede, embellecerlo con una pequeña ‘maquilladita’.”

¿Es este el caso del Modelo Económico Social Comunitario Productivo?

Para tener una respuesta razonablemente certera, revisamos los siete “pilares” que configuran el *modelo económico social comunitario productivo* (MESCP), y que –según los más altos

voceros del gobierno, explican por qué y cómo Bolivia logró las mayores tasas de crecimiento de América Latina:

1. la retención del excedente económico (el “government take”)
2. la inversión pública
3. la redistribución y la ampliación del mercado interno
4. el elevado ahorro interno
5. la bolivianización del sistema financiero
6. la articulación del capital bancario con el sector productivo
7. la diversificación productiva

### La retención del excedente económico (el “government take”)

El primer pilar es la llamada *retención del excedente*. Comprende varias formas a través de las cuales el Estado se apropia directamente de parte de los beneficios o utilidades que generan las actividades económicas. Además de impuestos, en las actividades extractivas la forma más conocida es el “government take”, que se define como la participación del Estado en el flujo de recursos asociado a un proyecto específico.

En el sector de hidrocarburos, el government take tiene sentido porque el recurso natural en su yacimiento –como el gas bajo la tierra, no tiene valor *comercial*, pero apenas se abre la llave al ducto que lo conducirá a un mercado, adquiere un valor mercantil que puede variar según las condiciones del mercado o de los términos contractuales acordados con el comprador en el extremo de salida; el dueño del gas es el pueblo (a través del Estado), y después de ajustar los ingresos por los costos de extraer el gas, ponerlo en el ducto, y transportarlo al cliente, recibe en su beneficio un porcentaje del nuevo “valor adquirido” (el government take).

Pero el gobierno extiende –erróneamente– el concepto del *government take* a empresas públicas y privadas productoras de bienes y servicios fuera del sector extractivo-rentista. Por ejemplo, el Gobierno considera “creativo” aplicar el government take a las utilidades del sistema de intermediación financiera (SIF). Según el MEFP, gracias a la financiarización que promueve el Modelo, desde 2006 el SIF acumuló (al 2017) utilidades por 2.240 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 802%; actualmente el Estado tendría una participación del 50% de las utilidades del sistema por las alícuotas adicionales que el Estado aplica desde 2012 al impuesto a las utilidades (IUE) del SIF.

Pero los 350 millones de dólares anuales de utilidades del sistema no salen “de la nada”; salen de los ingresos operativos de más de US\$ 3 mil millones (un 8% del PIB en 2017) que el SIF “extrae” (como intereses y comisiones) del valor agregado que generan los actores en la economía real. No es comprensible que, en tanto el Estado tenga su tajada, en vez de apoyar a la economía productiva induciendo la reducción del claramente alto “spread” financiero (origen de las enormes ganancias), sean bienvenidas las enormes utilidades del SIF, que por lo

además se concentran en muy pocos.

Se aplica el mismo concepto a ENTEL, BoA y a las otras empresas públicas que obtienen utilidades a costa del ingreso, de la capacidad de consumo de los hogares, o de la (mala) calidad del servicio. ENTEL habría contribuido con más de 17 mil millones de Bs a los bonos sociales y a los ingresos del Gobierno. Pero, a la luz de la crisis educativa generada por el COVID-19, ¿no habría sido mejor –para la gente y el desarrollo, que ENTEL baje a los precios reales, y establezca altos estándares de calidad y productividad a los operadores privados, evitando que el consumidor boliviano tenga uno de los más caros y peores servicios de internet?

En la misma lógica, ¿son razonables las utilidades de BoA si, en promedio, las tarifas vigentes son el doble de las que tenían el LAB o AeroSur, como muestra el cuadro para los pasajes ida-vuelta desde el eje hacia Buenos Aires.

A Buenos Aires desde:	AeroSur (1)	BoA (2)	(2)/(1)
La Paz	\$us 440,50	\$us 841,10	1.91
Cochabamba	\$us 420,50	\$us 786,10	1.87
Santa Cruz	\$us 371,50	\$us 735,60	1.98

Fuente: Gaceta Aeronáutica

Y, en general, ¿no sería el rol de las empresas públicas maximizar la eficiencia económica y social de sus operaciones beneficiando directamente a la ciudadanía en lugar de extraerle rentas que deprimen su capacidad de consumo, o causarle gastos por sus ineficiencias?

La nefasta lógica rentista se ha puesto en evidencia una vez más en la creación del servicio de registro de comercio, SEPREC: este registro está obligado de entregar anualmente al TGN, la misma cantidad de recursos que requiere para su funcionamiento, operaciones e inversiones: es otra instancia destinada a extraer rentas a los emprendimientos formales, porque sus servicios costarán al menos el doble de lo que valen. Notamos que la ley prohíbe crear rentas destinadas, como la que implica el sobre precio a lo que, además, debería ser un servicio público financiado con los impuestos “normales”.

En síntesis, fuera del sector extractivo el “government take” empobrece a la gente. De hecho, técnicamente, convertiría al Estado en “cómplice de robo” a los ciudadanos y a los actores económicos toda vez que, para participar en el excedente, el Gobierno acepta ineficiencias o costos adicionales con los que castiga a los consumidores finales, además de pérdidas de productividad y competitividad a los actores y las actividades económicas que generan valor y empleo.

### Inversión pública, distribución y demanda interna

Según los voceros del gobierno, las altas tasas de crecimiento económico son consecuencia de dos “pilares” del modelo económico social comunitario productivo, MESCP: la inversión pública que se traduce en la redistribución y la ampliación del mercado interno.

Por definición, el PIB es la suma de los ingresos (remuneración a trabajadores + excedente de las empresas + impuestos) y es igual a la suma de los gastos o “factores de demanda” (consumo final del gobierno y de los hogares + inversiones + exportaciones netas).

Cuando aumenta la inversión (manteniendo constantes las otras cuentas) el PIB aumenta *contablemente* porque aumenta la “demanda interna” (la suma de gastos en consumo + la inversión). Para que este crecimiento se traduzca en un crecimiento real de la economía en beneficio de la gente, deben establecerse una serie de relaciones “virtuosas” entre los factores de demanda: el mayor consumo debería ser satisfecho por una mayor oferta de bienes y servicios producidos *internamente*, generando más empleo, mayores ingresos laborales para los hogares, mayor capacidad de consumo (demanda) y, en general, las condiciones de mercado que alienten la mejora de la productividad en las empresas.

Comparando los aportes de los factores de demanda al crecimiento del PIB en el período “neoliberal” (NL, 1990-2005) y en el del proceso de cambio (PC, 2006-2019), se demuestra que este no es el caso del MESCP: la mayor demanda no se satisface por una mayor producción interna, como se esperaría, sino por importaciones.

Los datos del INE muestran que, la inversión respecto al PIB en el NL, era del 15% y en el PC sube al 19%; pero el consumo de los hogares respecto al PIB cae del 75% en el NL al 64% en el PC. Más aún, las importaciones respecto al PIB aumentan 7 puntos porcentuales en el PC (del 28% al 35%), de forma que la relación entre importaciones y consumo total, pasa del 31% en el NL, al 44% en el PC; las importaciones en relación al consumo de los hogares, suben del 37% al 55%.

Un detalle muy importante, es que los datos del INE no incluyen la masiva contribución del contrabando al consumo de los hogares, de manera que el real impacto total sobre el aparato productivo y el empleo, es abrumador.

#### ***Promedio de Indicadores de los factores de demanda***

INDICADOR	90-05	06-19
Componente externo de la demanda global	17.6%	27.2%
Componente importado de la demanda global	21.7%	25.9%
Coefficiente medio de importaciones	27.8%	35.1%
Coefficiente medio de exportaciones	22.5%	36.8%
Coefficiente de apertura externa	50.3%	71.9%
Participación del consumo en la demanda interna	84.8%	81.0%
Inversión respecto a demanda global interna	15.2%	19.0%
Consumo de hogares respecto a DGI	71.2%	65.5%
Importaciones respecto al consumo	31.2%	44.4%
Importaciones respecto al consumo de hogares	37.2%	54.8%

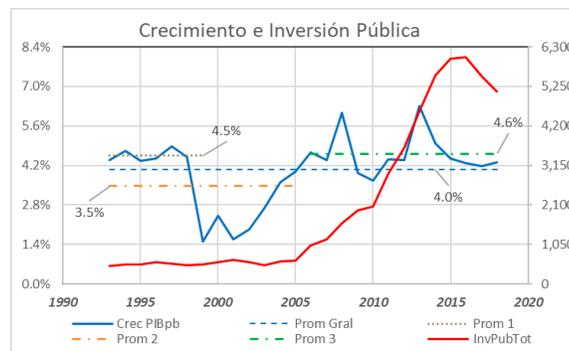
Fuente: Elaboración propia con datos INE aplicando la metodología de José Valenzuela Feijoo

Con menor participación de la producción interna en la oferta de bienes y servicios, no aumenta la creación de puestos de trabajo, ni el ingreso laboral ni la capacidad de consumo de los hogares: el crecimiento del PIB es “contable” por mayor inversión pública (que no aumenta la capacidad productiva) pero que no se refleja en las cuentas del ingreso como remuneración al trabajo o excedente empresarial: para que se mantenga la igualdad entre ingresos y gastos, la única cuenta del ingreso que aumentará son los impuestos (que en el siguiente año serán parte de una nueva inversión pública no productiva, que acentuará el deterioro de la economía productiva).

Esta es una razón por la que la mayor inversión en el PC no se refleja en mayor crecimiento. El crecimiento del PIB entre 1993 y 1998 fue del 4,5%; incluyendo la crisis mundial de 1998-2000, entre 1993 y 2005 tiene un promedio de 3,5%. Entre 2006 y 2019, fue de 4,6%. Para el gobierno, la razón es que, mientras entre 1993 y 2005 la inversión pública anual promedio fue de 556 millones de dólares, en los últimos 15 años alcanzó los \$us 3.700 millones, habiendo superado los 6.000 millones en 2016. Es decir, en promedio, 6 veces más inversión pública, con picos de hasta 10 veces más desde 2016.

Pero, en realidad, los datos oficiales sugieren que hay una fuerte reducción en la “eficiencia” de la inversión: en 1995, por cada dólar de inversión pública se tenía unos 12 dólares de PIB, razón que aumenta hasta 2005 cuando a cada dólar de inversión correspondían 14 dólares de PIB; pero desde entonces, la relación se ha desplomado al extremo de que, en 2015, cada dólar de inversión “genera” solamente 4 dólares de PIB, la tercera parte de la relación en el 2005.

**recimiento del PIB(%) e Inversión Pública Total (\$us M)**



Respecto a la ampliación del mercado interno, hemos destacado en notas anteriores que distribución del ingreso se ha deteriorado para los asalariados al pasar del NL al PC; el excedente de las empresas se mantiene sobre el 51% del PIB, pero las remuneraciones a los trabajadores y empleados cayeron del 36,1% en 2000, al 25% en 2013 mientras que las recaudaciones de impuestos se duplicaron del 13% al 25,4% del PIB en el mismo período. Esta tendencia no es compatible con “distribución”, sino con concentración del ingreso.

El deterioro de la distribución primaria del ingreso en desmedro de los asalariados, explica la caída en el gasto en consumo final de los hogares. La menor capacidad de consumos de los

hogares, reduce la demanda interna para los productos nacionales (hay menos asalariados), a lo que se suman otros factores como el tipo de cambio o la tolerancia social (y oficial) al contrabando, que definen un contexto sumamente adverso a la creación interna de valor y empleo.

En estas condiciones, el mercado interno se amplía para la producción externa pero se achica para la producción nacional. La combinación de una demanda decreciente con una alta competencia desleal, obliga a las empresas a operar muy por debajo de su capacidad instalada, pero sin posibilidad de reaccionar rápidamente a “pulsos de demanda” inducidos por algún bono debido a las rigideces del mercado laboral o a la burocracia. Por lo tanto, incluso los bonos destinados a fortalecer la demanda interna, terminan beneficiando a los productores externos.

Además del ciclo impuestos-inversión-impuestos que afecta negativamente la distribución (primaria) del ingreso, la “redistribución” en el modelo implica también transferir a las ETAS (las entidades territoriales autónomas) parte de los *excedentes retenidos* por la explotación de los recursos naturales (IDH, fundamentalmente) y de los impuestos recaudados.

Al respecto, las regiones han empezado un proceso de demanda por mayor equidad en estas transferencias, tema que adquiere mayor relevancia y urgencia luego de la aprobación de la Ley 1407. Al margen de qué curso sigan la controversia sobre este tema, es evidente que, en general, las ETAs tampoco priorizan el desarrollo de la capacidad productiva, por lo que usan esos recursos básicamente para sostener frondosas e improductivas estructuras políticas y administrativas.

En conclusión, estos dos pilares no aportan realmente a configurar un proceso efectivo de fortalecimiento del consumo interno a partir de una mejor distribución del ingreso y de la mejora de la capacidad de consumo que se requiere para promover la diversificación del aparato productivo nacional.

## Financiarización

Tres pilares que explican el *modelo económico social comunitario productivo* (MESCP), están vinculados a la fuerte financiarización de la economía que promueve el modelo: elevado ahorro interno; bolivianización del sistema financiero; y la articulación del capital bancario con el sector productivo.

Los aportes de estos pilares al modelo serían: la bolivianización que permitió controlar la política monetaria; el aumento del ahorro privado; y canalizar “capital bancario” a crédito productivo, lo que “des-represó” la dinámica económica.

Desde 2007 los ahorros crecieron 4,2 veces; las personas naturales aumentaron su ahorro 2,6 veces, las jurídicas 4,7 veces, y las instituciones 12 veces; el ahorro de las instituciones pasa de significar el 10% del ahorro total en 2005 al 31% en 2017, mientras que el ahorro de las personas naturales cae del 60% al 34% en el mismo período.

El valor de los depósitos está vinculado al valor de la cartera (deuda). Con los datos BCB, la relación entre la cartera total y el ahorro de las personas naturales y jurídicas en 2007 era 1 (1 Bs de deuda por cada Bs de ahorro), pero en 2017 es 1,50; es decir, la deuda hoy es 50% superior al ahorro, situación que se concentra especialmente en pequeños ahorristas (menos de US\$ 10.000) que pasaron de ser acreedores netos del sistema financiero hasta 2007, a ser deudores netos desde entonces.



La bolivianización está en el centro de los debates económicos. Sin duda, un dólar barato y fijo ayuda a bajar la inflación porque puede abastecer el mercado interno con productos importados, pero no ayuda al desarrollo y a la diversificación del aparato productivo, que definen la capacidad de crear empleo y demanda interna. Pero, ¿permitió ganar autonomía en política monetaria? En algún grado con el sector externo positivo, pero la autonomía solo sería posible si por la producción que vendemos al mundo recibiéramos Bs en pago; y si al importar lo que necesitamos, los proveedores aceptaran también Bs como medio de pago. Este, ciertamente, no es el caso.

Por último, el crédito aporta al crecimiento si contribuye a aumentar los ingresos, impacta positivamente en el empleo y genera nuevo valor al aumentar la capacidad productiva; no implica un aumento de deuda porque el crédito es honrado con el ingreso adicional: por cada Bs de crédito, se genera *al menos* el equivalente de otro Bs de ingreso. En estas condiciones, *la economía dirige al sector financiero*.

Si el financiamiento se destina al consumo –pagar vacaciones o comprar un tv LED–, la deuda compromete ingresos futuros; genera rentas para el banco y los vendedores, pero no crea nuevo ingreso al deudor ni valor a la economía. Financiar consumo aumenta el valor de activos financieros (bonos, inmuebles, etc.) y promueve la especulación con las rentas que genera comprarlos o venderlos; en general, aumenta el endeudamiento con bajo aporte al crecimiento. En estas condiciones de “*financiarización*” el bienestar actual hipoteca el ingreso futuro, crece el endeudamiento y *el SIF controla la economía*.

Desde 2006 Bolivia está avanzando peligrosamente al segundo escenario. Por ejemplo, el 80% de los ingresos del sistema financiero, que superan los US\$ 3 mil millones, se originan en intereses y comisiones que restan directamente un 8% del PIB a la economía real pero generan US\$ 320 millones de utilidades anuales al sistema financiero, monto astronómico frente a los

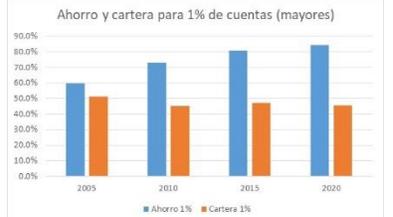
10 millones que el sistema tenía como promedio anual entre 1996 y 2005. Según el MEFP, gracias a la financiarización, el SIF acumuló utilidades por US\$ 2.240 millones al 2017, que implica un crecimiento del 802% respecto a 2006.

Las utilidades anuales del sistema de intermediación son casi 1% del PIB, pero el resultado global es negativo para la economía: la financiarización no ha aumentado la capacidad productiva real ni la cantidad de empleos dignos y productivos: en la medida que el sistema financiero no aporte efectivamente a diversificar la capacidad productiva y a crear nuevos ingresos, para las empresas, y empleo digno para los hogares, *lo que gana la banca, lo pierde la economía real.*

El crédito está sobre-concentrado en construcción, servicios inmobiliarios, comercio y el microcrédito; el 42% de la cartera productiva empresarial se destina a microempresas (con productividad más baja por factores de hasta 20:1) que, sistemáticamente, absorben casi el 50% del financiamiento *para capital de inversión* productiva empresarial.

Sería de esperar que la tasa de interés sea subvencionada para los pequeños productores, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario: la tasa para el microcrédito es más del doble que la tasa para las grandes y medianas empresas, lo constituye un incentivo para que los bancos canalicen preferentemente los recursos al microcrédito, a pesar de las severas limitaciones de estas actividades para agregar valor y crear empleo productivo.

En resumen, con la financiarización el bienestar en Bolivia no está siendo soportado por el mayor ingreso, sino por el endeudamiento que hipoteca los ingresos futuros.

		
<p>El 1% de las cuentas más grandes ha aumentado su participación en el ahorro, y la ha reducido en la cartera: son “ahorradores netos”</p>	<p>El 99% de las cuentas menores ha reducido su participación en el ahorro, pero la ha incrementado en la cartera: son “deudores netos”</p>	<p>La relación de la Cartera a Depósito por cuenta para las cuentas de menos de 10.000 dólares era 2,4 veces en 2005; en 2021 sobrepasa las 14 veces...</p>

### Si fracasó la diversificación productiva, el Plan no tiene base

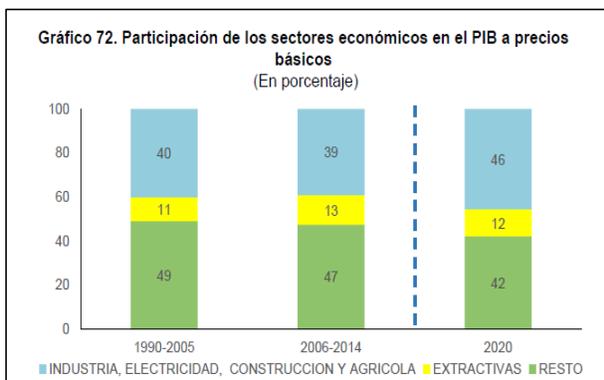
El último pilar del modelo vigente, es la diversificación productiva. El gobierno reconoce que no se cumplió con el que debería ser el pilar fundamental, porque solamente una economía diversificada puede garantizar la persistencia de cualquier modelo de gobierno comprometido con la equidad y el desarrollo sostenible.

La realidad es que, habiendo culminado el PDES 2016-2020 –que era el tramo inicial de la

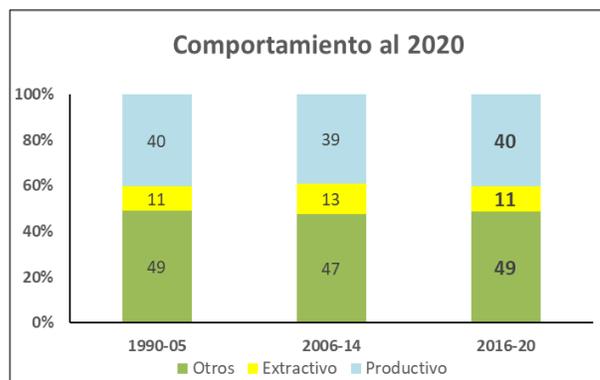
AP2025, las metas de diversificación productiva propuestas están aún más lejanas que cuando se fijaron en 2014.

Como establecimos al analizar los rasgos sectoriales del crecimiento, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-20, planteaba como resultado esperado de las acciones destinadas a diversificar el aparato productivo, que la participación agregada de industria, distribución de energía/gas/agua, construcción y de la agricultura en el PIB a precios básicos (sin considerar impuestos), aumentaría del 39% al 46% mientras que el extractivo aportaría con 12% (casi igual al período previo 2006-14) y el resto de los sectores bajarían del 47% al 42% (figura izquierda).

Los datos INE al 2020, figura derecha, muestran que cumplido el plazo del PDES 2016-20, no hay ningún cambio perceptible en la estructura del PIB hacia la meta del PDES. Ninguno. De hecho, cualquier ligero avance que hubiera habido entre 2006 y 2015, ha sido revertido para volver exactamente a la misma estructura “neoliberal” de 1990-2005.



Fuente: PDES 2016-2020



Fuente: Elaboración propia con datos INE

El tema se retoma en la agenda 2021-25 bajo la consigna de industrialización para sustituir importaciones; sin embargo, persiste la característica de que tal delicado tema, es uno más entre, literalmente, cientos de metas, proyectos y resultados que, históricamente, han sido intrascendentes para el desarrollo. Al justificarlo “porque es producto de consultar a la gente”, mostraría más bien que no se sabe qué hacer, que no se entiende la complejidad del desafío, y que no hay el liderazgo capaz de explicar qué y por qué debe hacerse algo, sea o no popular.

Las opiniones sobre el estado de la economía muestran que, hoy, conviven una agradable “sensación térmica” de estabilidad macroeconómica con bienestar, para quienes defienden el actual proceso, mientras que, en otros, predominan percepciones de insuficiencia de ingresos, de precariedad del empleo e incertidumbre sobre el futuro. Esta dualidad certifica que, el crecimiento registrado desde 2006, ni es uniforme ni ha llegado a todos.

El gobierno ha optado por posicionar un falso debate sobre el crecimiento al resaltar las magnitudes de las cifras para posicionar la “mayor tasa de crecimiento de Sud América” como el principal logro del modelo económico. La realidad es que, pese a los excepcionales ingresos percibidos y al alto crecimiento de los últimos años, Bolivia sigue entre las 4 economías más

pobres de América Latina. Incluso si su crecimiento fuera sostenible, le tomará generaciones converger al nivel de las economías vecinas.

Pero el crecimiento registrado es insostenible porque sus fundamentos no son sólidos: el PIB aumenta más por la recaudación de impuestos que por la creación de valor agregado; aumenta la inversión-gasto y baja el consumo de los hogares, pero aumenta la participación de las importaciones en el consumo interno; y la productividad se concentra en pocas regiones y actividades: la diferencia en el crecimiento de 2006-2020, respecto a 1990-2005, se explica casi totalmente, además de los impuestos, por el crecimiento de la participación e incidencia de solo 7 de 35 rubros: el sector financiero, administración pública, el sector extractivo, cemento, alimentos (soya y derivados) y bebidas (cerveza): ninguno de ellos aporta de forma significativa a generar valor agregado y a crear empleo.

Como resultado, hoy al menos 65% de quienes se incorporan al mercado laboral lo hacen forzados a hacerlo en actividades por cuenta propia, informales y de baja productividad, y un 20% adicional está subempleado. En suma, más allá del discurso exitista y del optimismo infundado, los datos muestran una realidad de “crecimiento empobrecedor” que afecta a la gran mayoría de las personas porque el crecimiento del PIB no cumple la condición básica de sostenibilidad: reflejar una creciente capacidad productiva (más producción, más empleo, justas remuneraciones, y consumo responsable).

Los problemas institucionales, sociales, políticos, eco-ambientales y económicos que Bolivia enfrenta son múltiples y enormes; ninguna propuesta de solución pasará de ser una buena intención (o ilusión, u otro descarado engaño) si no se establecen las prioridades técnicas y las secuencias políticas correctas; para ello, la condición necesaria, es superar las cegueras políticas, ideológicas, teóricas y “la conveniencia” de no querer ver la realidad.

Específicamente, el Plan de Desarrollo 2021-25 es inviable; no tiene como su primera meta construir una base productiva diversificada que genere los recursos para planificar y construir, con autonomía, un camino al desarrollo.

El país necesita tomar el toro por las astas y establecer una meta concreta: construir las bases para la diversificación productiva con empleo digno mediante reformas estructurales prioritarias en 4 ámbitos: i) las transformaciones político-institucionales básicas (democracia con equidad, estado de derecho, y justicia); ii) eco-ambientales (superar el extractivismo rentista, control de la minería “artesanal”, en especial la aurífera, y desarrollo del potencial energético renovable); iii) macroeconomía, comercio y políticas fiscales-sectoriales “pro producción, empleo, valor agregado y productividad”; y, iv) gestión pública transparente, eficiente e institucionalizada en todo nivel de gobierno.

¿Que esta agenda deja muchos temas fuera? Ciertamente; pero, primero, cumplir esa agenda de menos de 80 palabras implicaría una verdadera revolución institucional, política y socio-económica, con impactos verificables en el empleo, ingreso, calidad de vida y seguridad ciudadana; y, segundo, poner más temas sin la capacidad de abordarlos exitosamente, lejos de ayudar, quita recursos escasos a las verdaderas prioridades. La realidad del sistema de salud

desnudado por la pandemia, deja en claro que, sin una economía saludable, no hay “servicio de salud decente para la gente”; y ninguna reforma educativa tendrá sentido ni contenido en tanto la sociedad no defina las prioridades de su desarrollo que se reflejen en los principios y valores productivos que sustituyan a “la farra” o a la “viveza criolla” como modelos “de felicidad”.

El desarrollo es un proceso social complejo y, como tal, es una laboriosa construcción –muy participativa y secuencial, que necesita conductores que entiendan sus complejidades y sean capaces de mantener el curso correcto a pesar de las vicisitudes. Estar entre los últimos de América Latina no es tanto “obra del imperialismo”, sino de la incapacidad de nuestros gobernantes para entender el desarrollo, y de haberse rodeados de politiqueros que sólo quieren que no se les acabe la fiesta de “vivir del balcón y dormir en los curules”.

La gente los puso ahí, y ahora la gente tiene que hacer la diferencia.